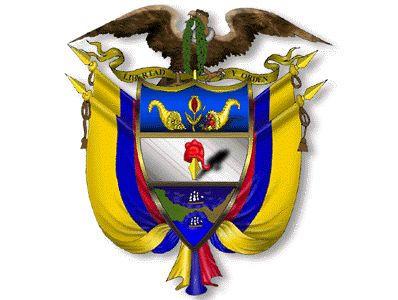
REPÚBLICA DE COLOMBIA

**RAMA JURISDICCIONAL **

**JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**

Diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019)

|  |  |
| --- | --- |
| **Acción** | **TUTELA 109** |
| **Accionante** | **SANDRA CONSTANZA CALDERON RAMÍREZ** |
| **Accionados** | **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y UNIVERSIDAD DE PAMPLONA** |
| **Radicado** | **05001 33 33 018 2019 000219 00** |
| **Procedencia** | **JUZGADO 018 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN** |
| **Instancia** | **PRIMERA** |
| **Providencia** | **Sentencia No. 175 de 2019** |
| **Temas y Subtemas** | **Carrera Administrativa – Recalificación – Debido Proceso** |
| **Decisión** | **Niega por improcedente** |

Procede el Despacho a decidir en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor **SANDRA CONSTANZA CALDERON RAMÍREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 43.544.561 en contra de la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL** en adelante **CNSC**,y de la **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA** pretendiendo de la jurisdicción constitucional el amparo de los derechos fundamentalesque estima vulnerados.

1. **LA ACCIÓN**

1.1 Peticiones

Solicita la accionante lo siguiente:

“*Con fundamento en las consideraciones jurídicas y fácticas señaladas, me permito solicitar al Despacho que ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad de Pamplona que* ***recalifique las preguntas 13, 37 y 50 de mi prueba de competencias funcionales,*** *asigne a dichas preguntas el puntaje correspondiente teniendo en cuenta que mis respuestas fueron acertadas* ***y, en consecuencia modifique la calificación que se me asignó en la prueba de competencias funcionales, sumando el puntaje adicional al que tengo derecho por las tres (3) preguntas recalificadas***” (Folio 10).

* 1. **Hechos**

Narra la accionante que está inscrita en la Convocatoria No. 429 de 2016 para el cargo es de Profesional Especializado Grado 3, de la Alcaldía de Medellín, para lo cual presentó el 04 de marzo de 2018 la prueba de competencias funcionales.

Expone que dentro del término establecido, presentó la reclamación contra la calificación de la prueba y siendo complementada el 18 de mayo de 2018 luego de haber tenido acceso al material de la prueba y precisa su reclamación solicitando sean recalificadas las preguntas 13, 37 y 50.

El 30 de abril del año en curso se da respuesta a su reclamación en la cual se niega la solicitud de recalificación de los 03 puntos solicitados, por lo que considera que con ello se le están vulnerando los derechos fundamentales invocados.

* 1. **Derechos vulnerados**

La accionante manifiesta que se le están vulnerando los derechos al debido proceso, igualdad, mínimo vital, trabajo y acceso a los cargos públicos por mérito.

1. **POSICIÓN DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS**

Proferido el auto admisorio de la tutela (fls 19), se dispuso la notificación de las entidades accionadas, diligencia que se realizó a través del correo electrónico para notificaciones judiciales el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018) (fls. 20 y 21).

2.1 **LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA** dio respuesta vía correo electrónico el 31 de mayo de 2019, donde expuso que la CNSC contrató los servicios profesionales de dicha universidad mediante contrato interadministrativo No. 281 de 2017 como operador logístico del concurso de méritos de acuerdo con la Convocatoria 429 de 2016 – Antioquia. Indica que antes de analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales que alega la accionante, es importante que el presente juez constitucional analice la procedibilidad de la acción de tutela en el caso en concreto. Ya como argumento de defensa indica que, la Universidad de Pamplona ha cumplido con todas las fases del concurso sin vulnerar los derechos alegados por la accionante y en el presente asunto funge como un simple operador que valida los requisitos que sean del caso, en tal medida solicita se despache de manera desfavorable la presente acción.

2.2 La **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL** dio respuesta a la acción mediante escrito allegado vía correo electrónico el 04 de junio de 2019, donde manifiesta que la presente acción resulta improcedente ya que se pretende contrariar las reglas encargadas de regir la subsidiaridad de la acción de tutela, toda vez que frente a las inconformidades presentadas por la accionante existe un mecanismo de defensa judicial idóneo, por lo que la tutela no es la vía para cuestionar la legalidad de los actos administrativos sobre lo que se presenta inconformidad.

Por lo anterior, el actor deberá acudir a los otros mecanismos de defensa contemplados en el Ley 1437 de 2011, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En relación al caso concreto de la accionante se indica que una vez consultados los resultados obtenidos en la prueba funcional SANDRA CONSTANZA CALDERON RAMIREZ aprobó, toda vez que obtuvo una calificación **70.85,** donde el valor mínimo para clasificar era de **65** puntos, sin embargo; a pesar de las reclamaciones realizadas por la accionante estas fueron resueltas y se aclaró del porqué dicha respuesta.

Adicionalmente, como argumentos de defensa dice la entidad que la Universidad de Pamplona es la entidad responsable de adelantar todo el proceso, bajo la supervisión de la CNSC realiza una breve exposición de la explicación realizada por la Universidad de Pamplona en el procedimiento de calificación y la respuesta brindada a la accionante, concluyendo que la entidad actuó conforme a derecho.

Por lo expuesto solicitó se declare improcedente la acción.

1. **CONSIDERACIONES**

**3.1 Competencia**

El Juzgado es competente para conocer de la acción de la referencia, de acuerdo con lo señalado en el **artículo 37 del Decreto 2591 de 1991**, en concordancia con lo dispuesto por el **Decreto 1983 de 2017** “*Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela*”.

**3.2 Problema jurídico**

Corresponde al Juzgado determinar si las entidades accionadas vulneran los derechos fundamentales de la accionante al no acceder a realizar nueva recalificación de las preguntas 13, 37 y 50.

**3.3 Acción de tutela**

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece la acción de tutela para que toda persona pueda:

“…reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Esta acción constituye un mecanismo subsidiario de defensa judicial, pues, en el evento de existir otros medios jurídicos para la protección de los derechos fundamentales, procede cuando éstos resultan insuficientes o ineficaces para otorgar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[[1]](#footnote-1); Por lo mismo ha de entenderse que la acción de tutela no es una herramienta judicial que pueda desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa.

**3.4 Procedencia de la acción de tutela**

La procedencia de la acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 5 del Decreto 2591 de mil novecientos noventa y uno (1991) de la siguiente manera:

“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.

Ahora bien, respecto de la subsidiariedad de la acción de tutela, la Honorable Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente[[2]](#footnote-2):

“[L]a regla que la jurisprudencia ha delineado en materia del principio de subsidiariedad consiste en que, por virtud del carácter residual y supletorio de la acción de tutela y dada su finalidad de protección inmediata y eficaz de los derechos constitucionales fundamentales, ésta solo procede en los eventos en que la accionante no cuente con otro mecanismo de defensa judicial idóneo para la protección de sus derechos y en tanto que dicha carencia no obedezca a la falta de diligencia del interesado para acceder a los medios ordinarios de defensa que prevé el ordenamiento, dentro de los términos señalados y siguiendo las formalidades previstas en la Ley”.

De esta forma, la acción de tutela procede para la protección de derechos fundamentales mientras no exista otro mecanismo de defensa judicial y en tanto la carencia de algún medio de amparo no obedezca a la incuria del interesado.

(…)

De igual forma, es pertinente destacar que la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que frente a los sujetos de especial protección constitucional tales como niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de minorías o personas en condiciones de extrema pobreza, como consecuencia de su estado de debilidad manifiesta y del especial amparo que la Constitución Política les brinda, el juicio de procedibilidad se torna menos riguroso habida cuenta que las especiales circunstancias que rodean a estas personas deben incidir en la valoración que el juez de tutela haga de tales requisitos, en aras de hacer efectiva la igualdad material y no tornar nugatorio el derecho al acceso a la administración de justicia”.

**3.4.1 Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto**

Como se acaba de observar en los numerales anteriores, la acción constitucional consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política se caracteriza por ser una acción preferente y sumaria que busca evitar de manera inmediata la amenaza o vulneración de un derecho fundamental, cuya procedencia está condicionada a que no existan otros medios ordinarios a través de los cuales se pueda invocar la protección del derecho en cuestión o que existiendo esta vía jurídica carezca de idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable.[[3]](#footnote-3)

Pues bien, en el caso concreto la accionante considera que las accionadas vulneran los derechos fundamentales invocados por negarse a realizar la recalificación de las preguntas 13, 37 y 50 del examen de competencias de la Convocatoria No. 429 de 2016 Antioquia.

En relación a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos dictados en el desarrollo de concursos de méritos, la Corte Constitucional ha indicado que en principio este no es el mecanismo idóneo, toda vez que existen los mecanismos judiciales ordinarios, en los cuales se puede solicitar la protección de los derechos fundamentales mediante la solicitud de medidas cautelares previas, sin embargo, señala algunas excepciones, así lo indicó en Sentencia T- 386 de 2016:

*“9. Como se señaló en los fundamentos de esta decisión, tratándose de actos administrativos en el desarrollo de concursos de méritos, la acción de tutela es, por regla general, improcedente debido a que en la justicia contencioso-administrativa existen los mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las decisiones que en el marco de tales concursos se profieren.*

*20. No obstante lo anterior, también se ha precisado que la regla general de improcedencia tiene dos excepciones, a saber: cuando (i) se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto; y cuando (ii) a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta ineficaz para conjurar la violación del derecho fundamental invocado. Además, se ha precisado que (iii) el acto que se demanda no puede ser un acto de trámite, sino que debe tener la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, siendo además necesario que se produzca a raíz de (iv) una actuación administrativa irrazonable que vulnere alguna garantía constitucional.[[4]](#footnote-4)”*

*(...)*

*27. Pues bien, sobre la valoración de las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisprudencia reciente de esta Corte[[5]](#footnote-5) ha establecido que estas han sido reformadas con la finalidad de ofrecer una mayor eficacia a la protección de los derechos fundamentales en los procesos que se desarrollan ante los jueces administrativos. Con base en estas razones, en la sentencia SU-355 de 2015 este Tribunal explicó que la nueva regulación en dicho campo es relevante para el examen de subsidiaridad que deben hacer los jueces de tutela.*

*28. Lo anterior, sin desconocer que en todo caso el juez de tutela debe determinar en cada caso concreto, si la protección ofrecida por el mecanismo ordinario es o no eficaz, pues el mayor grado de eficacia de las nuevas medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativo no necesariamente impide la utilización de la acción de tutela siempre que se corroboren las condiciones para la procedencia excepcional de esta última: la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable, o la no idoneidad o eficacia del mecanismo ordinario.*

*29. En relación con el análisis de la protección ofrecida por las medidas cautelares en lo contencioso administrativo, se encuentra que estas últimas pueden ser de dos tipos: ordinarias o de urgencia.[[6]](#footnote-6) Estas últimas, a su vez, pueden ser adoptadas desde el momento en que se presente una solicitud en ese sentido y sin necesidad de notificar previamente a la otra parte. De manera que la autoridad judicial puede adoptar una medida cautelar cuando verificadas las condiciones generales previstas para su adopción[[7]](#footnote-7), evidencie que por la urgencia que se presenta no puede agotarse el trámite previsto y deba adoptarse la medida. Adicionalmente, la decisión es susceptible de los recursos respectivos.*

Es claro entonces que la acción de tutela de manera excepcional es procedente en casos como el que nos ocupa y, que se debe acreditar la existencia de los requisitos desarrollados por la Corte Constitucional, para que se configure su procedencia, por tanto, se debe acreditar que se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable; que aunque existe un medio judicial, este es ineficaz para conseguir la protección de los derechos fundamentales; que no es un acto de trámite y que existió una actuación administrativa irrazonable.

En el caso particular, según respuesta brindada por la CNSC se indica que la accionante pese a obtener una calificación aprobatoria de las pruebas funcionales, presenta reclamación ante las accionadas para conseguir se recalifique tres preguntas que a su juicio no se calificaron de manera correcta, así mismo, la accionante indica que este promedio la afecta en la clasificación en la lista de elegibles y que por ello se presenta la vulneración de los derechos alegada.

Pues bien, de conformidad a lo indicado por la Corte Constitucional y las pruebas arrimadas en la acción, se tiene que la accionante aprobó el examen de competencias y que lo que busca con la recalificación es quedar en un mejor lugar dentro de la lista de elegibles, esto por sí no de muestra ni comprueba la vulneración de derechos fundamentales y menos la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez que como lo ha indicado la Corte Constitucional, mediante los mecanismos judiciales ordinarios y la solicitud de las medidas cautelares previas, dependiendo cada caso concreto, se puede evitar la ocurrencia del perjuicio irremediable; en la sentencia antes referida se indicó además lo siguiente:

*“38. Como se ha reiterado en los fundamentos de esta decisión, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la procedibilidad de la acción de tutela en los casos de concursos de méritos es excepcional pues el acto que se demanda debe tener la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa. Esta situación ya fue efectivamente corroborada en los párrafos precedentes.*

*39. Sin embargo, el juicio de procedibilidad en estos casos no solamente se agota en la naturaleza sustancial y definitoria del acto administrativo demandado, sino que además implica que la actuación administrativa sea fruto de una actuación flagrantemente irrazonable y desproporcionada por parte de la administración, y que por tanto con ella se evidencie la vulneración de las garantías establecidas en la Constitución.[[8]](#footnote-8)*

*(…)*

*47. Adicionalmente, la Sala encuentra que la utilización de la acción de tutela, en casos como el planteado en la tutela de la referencia, debe reservarse para amparar las graves afectaciones a los derechos fundamentales derivados de situaciones que configuren un perjuicio irremediable y que no puedan ser amparadas por los mecanismos judiciales ordinarios debido a la inminencia de la afectación de un derecho iusfundamental.*

*48. Esta situación –perjuicio irremediable– no se acreditó en este caso, pues por ejemplo no existía una fecha cierta de convocatoria para la etapa de curso-concurso que implicara la inminencia de afectación de sus derechos, tampoco se probó que los mecanismos cautelares de lo contencioso administrativos no fueran idóneos para salvaguardar sus derechos, y mucho menos se demostró que la decisión de la autoridad accionada fuera irrazonable o desproporcionada.”*

Como se observa, se requiere que expresamente se demuestre la existencia del perjuicio irremediable, no basta con alegarla; pero adicionalmente se debe acreditar que la actuación administrativa fue irracional y desproporcionada. Pues bien, en el presente caso, tenemos que todas las solicitudes y reclamaciones presentadas por la accionante fueron atendidas por las accionadas, esto no implica que la respuesta brindada deba ser de manera positiva y, en caso que verse vulnerado algún derecho, en el caso en concreto no se acredita la ocurrencia del perjuicio irremediable, por lo que la accionante debió acudir al mecanismo judicial ordinario.

Por lo expuesto esta agencia judicial negará el amparo solicitado por improcedente, e igualmente pone de presente a la parte accionante que controvertir las decisiones adoptadas por las entidades mediante actos administrativos cuya legalidad se presume, es asunto para debatir acudiendo a los medios de defensa ordinarios.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, administrando justicia, en nombre de la República, y por mandato de la Constitución y la Ley,

**FALLA**

**PRIMERO:** **NEGAR** por improcedentela acción de tutela interpuesta por el señor **SANDRA CONSTANZA CALDERON RAMÍREZ** quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 43.544.561.

**SEGUNDO:** Notifíquese la presente decisión a los interesados por telegrama o por cualquier otro medio expedito que garantice su cumplimiento (artículo 30 del Decreto 2651 de 1991).

**TERCERO:** Si la presente providencia no fuere impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su eventual Revisión (artículo 32 del Decreto 2651 de 1991).

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ARMEL VÁSQUEZ MEJÍA**

**JUEZ**

MG

10/06/2018

**NOTIFICACIÓN PERSONAL**

**JUZGADO DIECIOCHO (18) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**

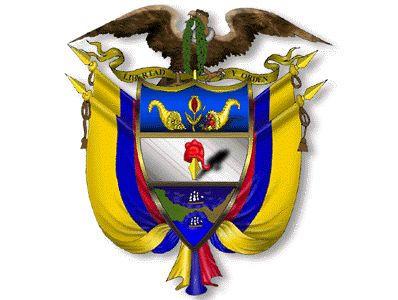
Medellín, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En la fecha compareció \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a quien se le notificó personalmente el contenido de la providencia anterior.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTIFICADO



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL**

**JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO**

**EDIFICIO ATLAS, CALLE 42 No. 48-55**

**MEDELLÍN**

**Telegrama N° 117 Cuenta 00800165798**

**SEÑOR**

**SANDRA CONSTANZA CALDERON RAMÍREZ**

**MEDELLÍN - ANTIOQUIA**

Referencia: **ACCIÓN DE TUTELA**

Radicado: 05001 33 33 018 **2018 00020 00**

Comunícole que dentro de la acción instaurada por usted, mediante providencia del 26-enero-2018 se decidió lo siguiente:

***PRIMERO: TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN*** *al señor* ***SANDRA CONSTANZA CALDERON RAMÍREZ*** *quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 43.544.561.*

***SEGUNDO:******SE ORDENA*** *a la* ***UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS*** *que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación dé respuesta a la petición presentada por la señora* ***SANDRA CONSTANZA CALDERON RAMÍREZ*** *donde solicita el pago de la reparación administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, en dicha respuesta deberá informar al interesado las actuaciones que adelanta para garantizar la indemnización a la población víctima de la violencia, y si en su caso particular existe viabilidad presupuestal para la colocación de los recursos.*

*En caso de requerir por parte de la señora Ursola Barilla documentación adicional para pronunciarse sobre el asunto, le informará de manera concreta la fecha y el lugar donde deberá radicarlos, y el término en que dicha entidad una vez recaude las pruebas pedidas procederá a pronunciarse de fondo.*

***TERCERO:*** *El incumplimiento de las ordenes impuestas en la presente providencia acarrea las sanciones consagradas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por lo anterior deberá informarse a este Despacho el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia (artículo 27, Decreto 2591 de 1991).*

***CUARTO:*** *Notifíquese la presente providencia a los interesados por telegrama o por cualquier otro medio expedito que garantice su cumplimiento (artículo 30, Decreto 2591 de 1991).*

***QUINTO:*** *Si la presente providencia no fuere impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su eventual Revisión (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).*

Atentamente,

**YEISY YAMILE OSPINA HERAZO**

**OFICIAL MAYOR**

1. La Corte Constitucional ha establecido un mínimo de supuestos que deben presentarse para considerar que determinado evento adquiere tal carácter:

   “(i) El perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté próximo a suceder, lo que significa que se requiere contar con los elementos fácticos suficientes que así lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin de tener la certeza de su ocurrencia.

   (ii) El perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona, puede ser moral o material, y que sea susceptible de determinación jurídica.

   (iii) El perjuicio producido o próximo a suceder, requiere la adopción de medidas urgentes que conlleven la superación del daño, lo que se traduce en una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y que esa respuesta armonice con las particularidades de cada caso.

   *(iv) La medida de protección debe ser impostergable, o sea, que no pueda posponerse en el tiempo, ya que tiene que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación del daño antijurídico irreparable.* (T-1003 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis)*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia T-972 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil seis (2006) [↑](#footnote-ref-2)
3. Sentencia T-1316 de 2001, reiterada por la Sentencia T- 494 de 2010 y la Sentencia T-733 de 2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Cfr*. Sentencia SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). [↑](#footnote-ref-4)
5. *Cfr*. Sentencia SU-355 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo). [↑](#footnote-ref-5)
6. *Cfr*. Sentencia SU-355 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo). [↑](#footnote-ref-6)
7. El artículo 231 del CPACA señala los siguientes requisitos para la procedencia de una medida cautelar: “*1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. // 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. // 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. // 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: // a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o // b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.*” [↑](#footnote-ref-7)
8. *Cfr*. Sentencia SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). [↑](#footnote-ref-8)